

El riesgo cambiante de hacer negocios en zonas de conflicto

A principios de este mes, más de 200 demandantes demandaron a empresas propiedad del promotor palestino-estadounidense Bashar Masri en los EE.UU. por prestar presuntamente apoyo a Hamás en relación con el atentado del 7 de octubre de 2023 contra Israel. Sólo unos meses antes, se informó de que un grupo de británicos-palestinos que han sufrido daños o han perdido familiares durante los ataques israelíes en Gaza, amenazaron con demandar en Inglaterra a una empresa energética internacional por supuestamente suministrar petróleo que facilita las operaciones militares de Israel en Gaza. Estos litigios ponen de relieve los riesgos de hacer negocios en zonas de conflicto, que a menudo se encuentran entre la espada y la pared.

Uno de estos riesgos es el litigio en virtud de la Ley Antiterrorista de Estados Unidos (ATA). El ATA crea un derecho de acción privado que permite a los ciudadanos estadounidenses perjudicados por un acto de terrorismo internacional demandar tanto a los principales infractores como a quienes colaboren o conspiran con una organización terrorista extranjera para cometer un acto terrorista. Los demandados en casos del ATA se enfrentan a indemnizaciones triples y honorarios de abogados—lo que puede dar lugar a una enorme exposición, ya que cientos de víctimas suelen demandar simultáneamente. Aunque finalmente se desestimen las demandas del ATA contra una empresa, es probable que estos procedimientos sometan a la empresa a años de costosos litigios y a un daño generalizado a su reputación.

Los demandantes llevan décadas interponiendo demandas de la ATA, pero su frecuencia y magnitud se han disparado en los últimos años, en parte debido al aumento de los conflictos armados en todo el mundo.

Sólo en 2025, los demandantes han presentado casi una docena de demandas del ATA por presunta implicación o prestación de apoyo al atentado del 7 de octubre. Hasta ahora, estos casos se han centrado principalmente en grupos supuestamente benéficos, organizaciones



Timothy Harkness

Socio



Jacob Johnston

Consejero



Maria Slobodchikova

Asociada sénior



Heather Cameron

Asociada

activistas e instituciones financieras, por lo que el caso contra las empresas de Masri puede ser un indicio de una tendencia a presentar demandas contra otros tipos de empresas que operan en la región por su presunto apoyo a Hamás.

Shalom contra Masri

El 7 de abril de 2025, más de 200 demandantes—víctimas de ataques de Hamás a partir del 7 de octubre (incluidos miembros del ejército israelí que murieron o resultaron heridos en acción en la Franja de Gaza) y sus familias y herencias—presentaron una demanda contra Masri y sus empresas ante un tribunal federal del Distrito de Columbia. Los demandantes alegan hechos que, de ser ciertos, darían lugar a responsabilidad directa, conspiración y complicidad.

Según la demanda, Masri y sus empresas construyeron y explotaron dos hoteles y el Polígono Industrial de Gaza (GIE), un parque industrial cercano a la frontera con Israel. Los demandantes alegan que Masri conspiró con Hamás para utilizar estas propiedades para construir y ocultar una elaborada red de túneles de ataque subterráneos que Hamás utilizaba para almacenar y lanzar cohetes. Los demandantes alegan además que Masri utilizó su imagen de empresario pacifista para atraer capital de instituciones gubernamentales y multilaterales estadounidenses como USAID, la ONU, la Unión Europea y la CFI.

El lugar difícil

Siempre hay más de una parte en un conflicto y (casi) siempre más de una jurisdicción cuya ley puede aplicarse. En diciembre de 2024, un grupo de británicos-palestinos que resultaron heridos o cuyos familiares murieron como consecuencia de los bombardeos israelíes de Gaza amenazaron con presentar demandas por daños y perjuicios ante un tribunal inglés contra las empresas energéticas que operan en la región. Los demandantes alegan que las empresas apoyaron a Israel en las continuas violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional al seguir suministrando petróleo crudo a través de un oleoducto fundamental para las operaciones militares de Israel mientras este país se encuentra inmerso en un conflicto armado en Gaza. Los demandantes han exigido a las empresas que cesen inmediatamente el suministro de petróleo a Israel, revelen documentos—incluidas políticas, contratos y evaluaciones de riesgos—relativos a sus operaciones en Israel, admitan su responsabilidad, se sometan a mediación para evaluar los daños y emitan una disculpa pública a los demandantes por los daños supuestamente causados.

Puntos clave

Uno de los retos de operar en una zona de conflicto es hacer negocios sin que se vea que se toma partido, lo que puede exponer a las empresas a litigios interpuestos por las partes en conflicto, civiles o grupos de interés afines en diversas jurisdicciones de todo el mundo. El cumplimiento estricto de los protocolos de cumplimiento y supervisión pueden ayudar con ciertas demandas, pero, en algunos casos, el hecho de operar en una zona de conflicto puede dar lugar a litigios. El panorama jurídico en este ámbito evoluciona con rapidez, por lo que las empresas que operan en zonas de conflicto o se plantean entrar en ellas deben estar al tanto de las últimas novedades.